

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN

CASACIÓN

SENT N° 1276

Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Comercial Común, Civil en Familia y Sucesiones y Penal, integrada por los señores Vocales doctores Daniel Leiva, Antonio D. Estofán, Daniel Oscar Posse y la señora Vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos- por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Daniel Leiva, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Asfoura Domingo Fuad vs. Atrio Arquitectura S.C. y otros s/ Sumario (residual)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Daniel Leiva y doctoras Claudia Beatriz Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor Vocal doctor Daniel Leiva, dijo:

I.-Viene a conocimiento de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra de la sentencia N° 675 de fecha 4/12/2024, dictada por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común. El recurso fue concedido por resolución N° 227 del 22/5/2025.

II.-La recurrente invoca cumplida la totalidad de los requisitos impuesto al remedio extraordinario local. Alega que si bien la sentencia impugnada resuelve una incidencia que no pone fin al pleito ni impide su prosecución, irroga a su parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior al privarla de una tutela procesal reconocida por el derecho aplicable al caso. Agrega que lo resuelto, compromete la regular prestación del servicio de justicia, por contradecir las mandas convencionales, constitucionales y legales de tutela de los derechos reconocidos a colectivos vulnerables como el que integra, por su calidad de consumidor. Invoca el apartamiento de la recta interpretación del derecho aplicable lo que a su criterio priva de sustento al pronunciamiento impugnado que tacha de arbitrario.

Explica que el codemandado Atrio Arquitectura SC inició un incidente de solvencia con fundamento en el art. 53 de la Ley N° 24.240, peticionando el cese del beneficio de justicia gratuita reconocido al actor. Señala que su parte contestó la incidencia deducida solicitando su rechazo, con expresa imposición de costas. Expresa que en esa oportunidad procesal sostuvo que con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, la cuestión

planteada debía ser resuelta a la luz de la ley adjetiva local, que regula el proceso especial de consumo. Afirma que invocó lo dispuesto en el art. 481 del código de rito que, al regular el beneficio de justicia gratuita, dispone que "cuando los consumidores o usuarios inicien actuaciones judiciales gozarán del beneficio de justicia gratuita", destacando que el art. 487 contempla como única causal de cesación, el hecho de que el consumidor haya litigado sin razón probable, circunstancia no alegada por la incidentista.

Señala que la señora Jueza de l° instancia dispuso hacer lugar al planteo de cesación del beneficio de gratuidad, oportunamente reconocido al actor consumidor; resolución que motivó la interposición del recurso de apelación de su parte. Menciona que, en sus agravios ante la Alzada, con cita de doctrina y jurisprudencia respaldatoria, justificó las diferencias entre el beneficio de litigar sin gastos y el de justicia gratuita, consagrado por el régimen protectorio del consumidor; institutos erróneamente equiparados por la sentencia apelada. Destaca que su parte cuestionó, asimismo, la aplicación por analogía del art. 53 de la Ley N° 24.240 para disponer con ese fundamento, el cese del beneficio de gratuidad, apartándose de las disposiciones de la normativa procesal local.

Señala que pese a los agravios propuestos en la instancia revisora, la Cámara dispuso rechazar, con costas, el recurso de apelación interpuesto; pronunciamiento que motiva la presente impugnación casatoria.

En su memorial de casación, el recurrente invoca la infracción a normas de derecho sustancial y formal. Denunció que la sentencia impugnada se aparta, sin justificación, de lo previsto en los arts. 481 y 487 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Sostiene que el apartamiento de las normas estrictamente aplicables al caso, derivó en la recepción del incidente de solvencia, con la consiguiente conculcación de una tutela procesal diferenciada en favor del consumidor.

Señala que el beneficio de justicia gratuita está consagrado en el régimen protectorio a fin de garantizar el acceso a la justicia a todos los consumidores por su sola condición de tal. Alega que la regulación del instituto contenida en la Ley N° 24.240 constituye piso mínimo de tutela, que habilita a las jurisdicciones locales a adoptar un modelo que incremente esa protección de base. Afirma que con la entrada en vigencia del nuevo digesto procesal civil y comercial, el legislador provincial elevó el nivel de esta tutela procesal regulando un "beneficio de justicia gratuita, distinto y superador" del previsto en el art. 53 de la Ley 24.240. Sostiene que los arts. 481 y 487 procesales contemplan como única causal de cesación, el supuesto en que se acredite que el consumidor litigó sin razón probable.

Cuestiona que la Cámara sostenga que estamos ante una omisión o laguna de la ley local que autoriza la aplicación analógica del ordenamiento nacional de defensa del consumidor. Insiste en que no es que el legislador provincial se olvidó de regular el incidente de solvencia, como lo

sostiene la Cámara, sino que deliberadamente ha excluido del ordenamiento procesal local, la posibilidad de hacer cesar el beneficio de gratuidad, mediante la interposición de un incidente de solvencia, remedio procesal previsto en el art. 53 de la Ley N° 24240. Afirma que frente ello, resulta infundado sostener que "corresponde estar a la norma nacional".

Le agravia que el Tribunal de Alzada rechace sus alegaciones con el argumento de que la interpretación propuesta por su parte, no trasunta un ejercicio regular del derecho reconocido al consumidor.

Insiste en que la aplicación de las normas adjetivas procesales vigentes, no está sujeta a la discrecionalidad del sentenciante. Sostiene que incluso en la hipótesis de que el texto de la norma no fuera claro, o generase alguna duda, prevalece la interpretación más favorable al consumidor que emana del art. 3 de la Ley N° 24.240. Con cita de Sozzo afirma que ante la existencia de conflictos normativos, "este principio constitucional y legal se transforma... en un postulado de maximización de protección en favor del consumidor". Alega que "a la misma conclusión llegamos aplicando el principio *pro homine* y el principio de progresividad de los derechos de los consumidores".

Afirma que "los derechos de los consumidores forman parte de los derechos humanos, con lo cual el tema sub examine debe ser analizado a la luz de lo expuesto en el art. 75, inc 22 11 CN, donde se hace referencia a los tratados internacionales y se le otorga categoría de norma supralegal".

De conformidad a las alegaciones sucintamente reseñadas, propone doctrina legal y pide se admita la procedencia del recurso interpuesto, con costas a la demandada vencida, dejando sin efecto el pronunciamiento que priva a su parte del beneficio de justicia gratuita reconocido a su parte.

III.- De las constancias de la causa surge que por sentencia del 4/12/2024, la Sala III de la Excma Cámara en lo Civil y Comercial dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el fallo que, a su turno, admitió la procedencia del incidente de solvencia deducido por la codemandada Atrio Arquitectura SC, a fin de hacer cesar el beneficio de gratuidad reconocido al accionante en su calidad de consumidor.

La Cámara, con cita de precedentes de la propia Sala, sostuvo que el beneficio de la llamada justicia gratuita previsto por la Ley N° 24.240 consagra una presunción *iuris tantum* que beneficia al consumidor y que aquel beneficio "puede ser dejado sin efecto, en consecuencia, mediante la debida acreditación, por la contraparte, de que no se reúnen, en el caso concreto, las condiciones para su concesión". Destacó que "se trata de una cuestión de hecho que no causa estado, y puede ser revocada, si así lo ameritara la valoración del magistrado, en el caso particular (Dres. Ibañez-Acosta, CCCC, Sala 3, "Bellomo Jenny Carolina C/ Piazza S.A. S/ Sumarísimo (Residual) s/ Incidente Para Acreditar Solvencia - Expte. N° 628/18-j1", sentencia del 30/06/20)".

Sostuvo que confrontando la normativa procesal

local –que omite la previsión expresa del incidente de solvencia en el art. 481 del código de rito-, con lo dispuesto por el art. 53, in fine, de la Ley N° 24.240 –que lo contempla específicamente- se constata que "...entre ambas normas no existe contradicción, y que la acreditación de la solvencia del consumidor prevista en la LDC remite a una cuestión de juzgamiento de resorte exclusivo del órgano jurisdiccional".

Señaló que la doctrina y jurisprudencia constitucional es pacífica al sostener que no existen en nuestro ordenamiento jurídico derechos absolutos sino que todos -incluso los de naturaleza política- se encuentran sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y en esa línea argumental, desestima el agravio de la apelante en orden a que la normativa procesal local no permite desvirtuar la presunción iuris tantum de justicia gratuita, mediante la promoción del incidente solvencia; alegación que a criterio del tribunal "resulta a todas luces irrazonable".

Consideró que la decisión del caso impone la integración normativa pues se trata de una omisión de la ley local –laguna del derecho-, que autoriza la aplicación analógica del ordenamiento nacional, por ser parte del microsistema consumeril bajo análisis. Interpretó que "pudiendo reglamentar aspectos puntuales del beneficio, el legislador tucumano no lo hizo expresamente, por lo cual corresponde estar a la norma nacional" que prevé el incidente de solvencia como vía para peticionar la cesación del beneficio de gratuidad.

Expresó que el Congreso Nacional está habilitado para dictar normas de procedimiento cuando fuesen razonablemente necesarias para el mejor ejercicio de los derechos consagrados por ese derecho común o de fondo y que las disposiciones sobre justicia gratuita contenidas en el régimen protectorio del consumidor resultan aplicables y "directamente operativas en todo el territorio de la Nación".

Sostuvo que la interpretación propuesta por el recurrente; esto es, que "solo en Tucumán, la presunción de justicia gratuita es absoluta e irrebatible mediante el incidente de solvencia, no trasunta el ejercicio regular de dicho derecho".

La Cámara consideró relevante explicitar que "el servicio de administración de justicia es oneroso, salvo las excepciones que – requisitos mediante- puedan contemplarse. Y reprocha al recurrente guardar silencio acerca del fondo de la cuestión, esto es, que se tuvo por acreditada, mediante la prueba producida, la solvencia del actor. Señaló que "pretender, en tales condiciones, que su obrar en juicio continúe siendo gratuito -pese a la probanza en contrario de la mentada presunción iuris tantum-, conlleva a un enriquecimiento sin causa, perjudicial para el universo de justiciables que si necesita acceder, sin costos, al sistema judicial".

IV.- Juicio de admisibilidad del recurso.

En recurso interpuesto ha sido presentado en término y los recaudos establecidos por la Acordada N° 1498/18 lucen

debidamente observados.

Si bien la sentencia recurrida no satisface el recaudo formal establecido por el art. 805 inc. 1 del CPCC, en tanto no concluye el pleito ni impide su continuación, la cuestión resuelta por el tribunal de alzada asume caracteres de gravedad institucional (art. 805 inc. 2 procesal), al comprometer la implementación eficaz de un mecanismo de tutela procesal diferenciada establecido en un régimen protectorio de orden público que el ordenamiento procesal local regula de modo particular.

En el memorial casatorio se invoca con suficiencia, el apartamiento de la recta interpretación del derecho aplicable que consagra el beneficio de justicia gratuita en favor de los consumidores y mediante disposiciones que deben analizarse conforme la regulación contenida en la Ley N° 24.240 y demás normas que integran el régimen protectorio, sin soslayar las directivas establecidas para su implementación en el ordenamiento procesal vigente (cfr. arg CSJT, sent. N° 1593 del 22/12/2022, "Canseco, Emilse Natalia vs. Grimoldi S.A. s/Sumario (residual)"). Todo ello, en consonancia con los principios que emergen de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que nuestro país sea parte (art. 1 y 2 CCyC).

El recurso resulta por tanto admisible, correspondiendo ingresar al examen de procedencia.

V.- Análisis de procedencia del recurso.

Confrontados los agravios que sostienen la impugnación casatoria con los antecedentes de la causa, los fundamentos del pronunciamiento impugnado y el derecho aplicable al caso, se constata que el recurso debe prosperar.

La atenta lectura del pronunciamiento recurrido permite concluir que la cuestión sometida a conocimiento del tribunal de alzada fue resuelta ciñéndose, por un lado, a la literalidad del texto del art. 53 de la Ley N° 24.240 que consagra el beneficio de la justicia gratuita para los consumidores, soslayando la regulación particular del instituto contenida en el digesto procesal local vigente, de estricta aplicación al caso de autos. La Cámara, a partir de una errónea interpretación de las disposiciones legales, decide la cesación del beneficio de justicia gratuita, comprometiendo irremediablemente la implementación de una tutela procesal diferenciada, de raigambre constitucional y convencional, justificando la procedencia del recurso en análisis.

V.1- El beneficio de justicia gratuita: su recepción legal en la Ley de Defensa del Consumidor.Fundamento constitucional y convencional.

El beneficio de justicia gratuita es consagrado, para las acciones individuales, en el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, al dejar establecido que "Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita..."; dispositivo que se replica al regular las acciones colectivas cuando, en el art. 55, dispone que "Las acciones judiciales iniciadas en

defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita".

La doctrina sostiene en forma unánime que el beneficio de justicia gratuita constituye una tutela procesal diferenciada (Berizonce, Roberto O., "Fundamentos y confines de las tutelas procesales diferenciadas", en *Revista de Derecho Procesal 2008-2*, p. 41) que el sistema protectorio de los consumidores consagra con fundamento en "el derecho constitucional de acceso a la solución de conflictos" (Stiglitz, Gabriel A., "Acceso de los consumidores a la justicia", en Stiglitz, Gabriel A.- Hernández, Carlos A. (Dirs.), *Tratado de Derecho del Consumidor*, T. IV, p. 9 y ss.).

En efecto, el art. 42 de la Constitución Nacional enuncia, en el párrafo primero, los derechos de los consumidores en la relación de consumo; y, en el párrafo segundo, imparte un mandato de tutela general al establecer que "las autoridades proveerán a la protección de esos derechos", precisando en el tercer párrafo, que "la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos". Estas directivas permiten sostener que la obligación de "asegurar la tutela judicial efectiva de los consumidores goza de indubitable cimiento constitucional" (cfr. Sahián, José H., "Dimensión constitucional de la tutela judicial efectiva de los consumidores", JA 2018-I, 1309).

La imposición del mandato de diseñar e implementar "procedimientos eficaces" (art. 42, 3er. párrafo, CN) importó el reconocimiento de un "derecho de acceso" a los mismos, que ha sido calificado por la doctrina especializada como un "derecho fundamental" con todas sus implicancias (Sahián, José H., "El fundamental acceso gratuito a justicia", LL 2024-E, 466).

Se destaca con razón que "el derecho de acceso a la justicia no se agota al golpear la puerta del juzgado para ingresar presentando la demanda" sino "transitar en plenitud el proceso" (Manterola, Nicolás, "Estudio del beneficio de justicia gratuita (arts. 52 y 55, Ley N° 24.240)", RDCO 310, 273), "hasta lograr una decisión justa que permita materializar los derechos y garantías que la propia Ley Fundamental les reconoce" (Kalafatich, Caren-Barocelli, Sebastián, "Gratuidad en los procesos de consumo", LL 2017-D, 1), para lo cual se impone "la remoción de distintos tipos de obstáculos que históricamente dificultaron y que actualmente siguen impidiendo el ingreso (y permanencia) de ciertos grupos al servicio de justicia" (Verbic, Francisco -Sucunza, Matías A., "Acceso a la justicia y beneficio de gratuidad en materia de acciones de consumo y medioambiente", en Morello, Augusto M. – Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados, T. II, p. 101-110).

El derecho de acceso a justicia y a una tutela efectiva que emerge del art. 42 CN y de los tratados que integran el bloque de constitucionalidad (art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. XVIII de la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), "se ubica en el vértice de la escala valorativa constitucional" puesto que "no sólo es un derecho fundamental sino uno de los más trascendentes por constituir el derecho a hacer valer los propios derechos" (Berizonce, Roberto O., "Fundamentos y confines de las tutelas procesales diferenciadas", en *Revista de Derecho Procesal 2008-2*, p. 38-39).

Berizonce explica que se impone al legislador la obligación de diseñar verdaderas "instituciones equilibradoras de las posiciones de las partes en el proceso, adecuadas para la salvaguarda de los derechos"; objetivo que se logra acudiendo a "técnicas orgánico-funcionales" ("fueros especializados para decidir conflictos típicos en el marco de ordenamientos procesales específicos, mediante órganos integrados por una magistratura especializada") o "técnicas procesales", entre las que se incluye el beneficio de justicia gratuito del art. 53 LDC. El autor citado destaca que dentro de nuestro sistema, las tutelas procesales diferenciadas encuentran explícito soporte en los preceptos constitucionales que "habilitan una verdadera justicia protectora acompañamiento" (ob. cit., p. 39-41).

El derecho de acceso y a una tutela judicial efectiva se traduce, en el caso analizado, a través de una técnica procesal particular que el legislador nacional ofrece al colectivo de consumidores, en razón de la vulnerabilidad estructural que los afecta y a fin de asegurar la implementación de los mecanismos de resguardo de sus derechos. Son precisamente las asimetrías entre los sujetos de la relación de consumo, en sus múltiples manifestaciones, las que definen la noción de vulnerabilidad, presupuesto y fundamento del sistema de tutela del consumidor (cfr. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, p. 35 y sgtes., 39 y sgtes). Ese desequilibrio relacional es el que explica el paradigma protectorio, inspirado en "una nueva concepción de la garantía de igualdad o principio de la igualdad real, que se hace cargo de las diferencias en las asignaciones previas y prevé la tutela de los vulnerables" (Sahián, José H., "Dimensión constitucional de la tutela judicial efectiva de los consumidores", JA 2018-I, 1309).

Las asimetrías y la consiguiente desigualdad de los sujetos de la relación sustancial se replica en la relación procesal, cuando el consumidor individual o colectivo reclama la tutela de un derecho amenazado o efectivamente conculcado por el proveedor (Lovece, Graciela, "La justicia gratuita en el ámbito del consumo. El fallo de la Corte y el camino hacia una interpretación unívoca sobre sus alcances", RCCyC 2022 (febrero), 225). Precisamente "el expreso reconocimiento constitucional-convencional de esta situación de vulnerabilidad... y el consiguiente compromiso-obligación del Estado de adoptar medidas positivas, específicas y efectivas tendientes a restaurar el desequilibrio preexistente y proteger a tales grupos de modo especial y privilegiadamente, supuso en materia procesal la adopción de una serie de tutelas diferenciadas que tuvieron como expresión concreta -en materia de acceso a la justicia- el otorgamiento de distintos beneficios. Entre ellos, la gratuidad en las actuaciones

que se promoviesen tanto por los afectados como por los legitimados colectivos previstos constitucional y legalmente para representar intereses de dichos grupos" (Verbic, Francisco - Sucunza, Matías A., "Acceso a la justicia y beneficio de gratuidad en materia de acciones de consumo y medioambiente", en Morello, Augusto M. – Berizonce, Roberto O., *Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados*, T. II, p. 101-110).

Como bien se destaca, "tales específicas garantías no revisten rango meramente legal, sino que emergen del propio bloque de constitucionalidad, lo que provoca un atrayente diálogo de fuentes entre el Derecho Constitucional, el Procesal, el microsistema de defensa de los consumidores y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (Sahián, José H., "Dimensión constitucional de la tutela judicial efectiva de los consumidores", JA 2018-I, 1309), que no puede ser soslayado.

"La protección de los derechos del consumidor desde la teoría de los derechos humanos resulta significativa en orden a las consecuencias prácticas que cabe derivar de ello" pues "en un plano interpretativo los derechos enumerados en el art. 42 de la CN han de analizarse de conformidad con los alcances y amplitud que le dan los Tratados Internacionales en tanto estos textos complementan el enfoque constitucional" (Frustagli, Sandra A. - Hernández, Carlos A., "La protección al consumidor desde la perspectiva de los derechos humanos y de los derechos fundamentales", JA 2017-III, 1341).

V.2.- El beneficio de justicia gratuita en la Ley de Defensa del Consumidor y en las normas procesales locales. Interpretación.

Se señala con acierto que el beneficio de justicia gratuita previsto en los arts. 53 y 55 de la Ley de Defensa del Consumidor constituye un "instrumento medular para el acceso a la justicia" (Kalafatich, Caren-Barocelli, Sebastián, "Gratuidad en los procesos de consumo", LL 2017-D, 1). "Se trata de un *mínimo necesario* para garantizar la efectiva tutela de derechos de raigambre constitucional" (Arias, María Paula - Muler, Germán E., "La tutela efectiva de los derechos del consumidor. Con especial referencia a las Provincias de Tucumán y Santa Fe, SJA 17/10/2018, 29; ver asimismo, CS de Santa Fe, 15/08/2017, "Salvatto, Flavia Vanesa vs. BGH S.A. s/Daños y perjuicios-Recurso de inconstitucionalidad").

En la misma línea se pronunció el XVII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, al dejar establecido que "el beneficio de justicia gratuita del consumidor o usuario tanto para el ejercicio de acciones individuales como colectivas (art. 53 y 55 de la ley 24.240) constituye una derivación del derecho fundamental a obtener procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos (art. 42 CN). En otras palabras, dicho beneficio legal constituye una herramienta de implementación de derechos fundamentales" (Conclusión 10 de la Comisión Nº 2 que debatió sobe "Medios alternativos y protección procesal del consumidor", Mar del Plata, 3 y 4 de noviembre de 2017).

La doctrina califica al beneficio de justicia gratuita

como una tutela procesal diferenciada, de singular relevancia (Barreiro, Rafael F., "La gratuidad de las acciones individuales de consumo. Vigencia efectiva del principio protectorio con perspectiva constitucional y convencional en una contundente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán", JA 2023-I, 526; Verbic, Francisco - Sucunza, Matías A., "Acceso a la justicia y beneficio de gratuidad en materia de acciones de consumo y medioambiente", en Morello, Augusto M. – Berizonce, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Comentados y Anotados, T. II, p. 101-110); Junyent Bas, Francisco - Flores, Fernando M., "La tutela constitucional del beneficio de gratuidad contenido en el art. 53 de la LDC", DCCyE, 2012 (febrero), 63; Lovece, Graciela, "La justicia gratuita en el ámbito del consumo. El fallo de la Corte y el camino hacia una interpretación unívoca sobre sus alcances", RCCyC 2022 (febrero), 225; Krieger, Walter, "El Código Procesal de la Justicia de las relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un paso hacia el fuero especial", RDCO, 308, 3; Arias, María Paula- Quaglia, Marcelo, "El beneficio de justicia gratuita en el ámbito del consumo", RDCO 294, 139; Mumare, María, "Beneficio de gratuidad e incidente de solvencia en el Código Procesal de la Justicia de las Relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", RDCO, 308, 125; Manterola, Nicolás, "Estudio del beneficio de justicia gratuita (arts. 52 y 55, Ley N° 24.240)", RDCO 310, 273).

El denominado beneficio de justicia gratuita constituye, en efecto, un rasgo distintivo del sistema de tutela de los consumidores (Barreiro, Rafael F., "La gratuidad de las acciones individuales de consumo. Vigencia efectiva del principio protectorio con perspectiva constitucional y convencional en una contundente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán", JA 2023-I, 526). Se lo considera "una figura autónoma" (Kielmanovich, Jorge L., "Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita", LL 2019-D, 1063) y precisamente en razón de sus "notables diferencias" (Raschetti, Franco, "El incidente de solvencia del art. 53 de la Ley N° 24.240", LL 23/9/2024, 5) es que no debe confundirse con otros mecanismos de franquicia, especialmente con el beneficio de litigar sin gastos o la denominada carta de pobreza Sahián, José H.-Páez Pacheco, Emmanuel, Gratuidad. Beneficio de litigar sin gastos. Acceso gratuito a justicia de consumidores, p. 8 y sgtes.; Raschetti, Franco, "El incidente de solvencia del art. 53 de la Ley N° 24.240", LL 23/9/2024, 5; Junyent Bas, Francisco - Flores, Fernando M., "La tutela constitucional del beneficio de gratuidad contenido en el art. 53 de la LDC", DCCyE, 2012 (febrero), 63).

Oportuno es recordar que "el beneficio de gratuidad no se funda únicamente en una presunción de impotencia patrimonial del consumidor para afrontar los gastos del proceso, sino en su calidad de tal... En esa posición desventajosa en la que se sitúa el consumidor frente al proveedor, la capacidad económica es uno, entre muchos elementos configurativos de tal desigualdad. No debe perderse de vista que cuando la normativa presupone la distinta posición en que se encuentran en el mercado para justificar la solución protectoria, lo hace desde las características que definen legalmente a cada

grupo, independientemente de las particularidades individuales de cada sujeto que integre las respectivas categorías" (Mumare, María, "Beneficio de gratuidad e incidente de solvencia en el Código Procesal de la Justicia de las Relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", RDCO, 308, 125).

Ya la Corte Nacional tuvo oportunidad de pronunciarse en sentido similar, al señalar que "la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa, cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo" (CS, 24/11/2015, "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c. Nación Seguros S.A. s/Ordinario"). En igual sentido se pronunció esta Corte (CSJT, sent. N° 609 del 07/07/2021, "González, Darío Edmundo c/ Banco del Tucumán Grupo Macro s/ Daños y perjuicios").

Al consagrar el beneficio de justicia gratuita, el legislador nacional dio "respuesta a las mandas constitucionales, re-impulsadas a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ponen foco en un derecho real de acceso a la Justicia" (Chamatrópulos, Demetrio A., *Estatuto del Consumidor Comentado*, T III, p. 1578, nota 3402). El diseño y la implementación de mecanismos de tutela procesal diferenciada, "que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, constituyen una clave neurálgica del acceso a la justicia" (Toledo, Pablo R., "La tutela especial del amparo frente a los costos económicos del proceso judicial: estándares y tendencia", JA 2018-III, 68).

Se impone reiterar que el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita en la Ley N° 24.240 (reformada por la Ley N° 26.361 del año 2008) obedece a la innegable necesidad de remover obstáculos de acceso al proceso; pero el legislador nacional pretendió, también, generar incentivos para la promoción de reclamos en defensa de los derechos de los consumidores (cfr. Colombres, Fernando M., "La Suprema Corte de Justicia de Tucumán amplía el camino marcado por la Corte Nacional respecto del beneficio de justicia gratuita haciéndolo extensivo a los procesos individuales", LL 01/11/2021, 8; Calderón, Maximiliano R.- Cornet, Manuel,- Carrara, Juan Francisco.-Márquez, José Fernando- Tinti, Guillermo, *Procedimiento Judicial y Administrativo de Defensa del Consumidor*, p. 34; Depetris, Carlos E., "El beneficio de justicia gratuita y las costas en acciones individuales de consumo, Alternativas de decisión y consecuencias prácticas", RCCyC 2024 (agosto), 229).

Ahora bien, "el beneficio de justicia gratuita es un concepto jurídico que carece de contenido perfectamente delimitado" (Barreiro, Rafael F., "La gratuidad de las acciones individuales de consumo. Vigencia efectiva del Principio Protectorio con perspectiva constitucional y convencional en una contundente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán", JA 2023-I, 526). De allí que los debates en torno a la naturaleza, extensión y alcance del beneficio, así como lo vinculado a la implementación del mismo, requieran una labor hermenéutica ajustada al fundamento del sistema protectorio de los

consumidores, a la raigambre constitucional de los derechos implicados y en sintonía con los principios y garantías consagrados en los Tratados de Derechos Humanos, que aportan su caudal luminoso en la definición de los contornos de la tutela efectiva reconocida a este colectivo vulnerable. "La reforma de 1994 ha incorporado a la Constitución Nacional con jerarquía constitucional una serie de cardinales tratados (art. 75, inc. 22, CN) que extienden o amplían sustancialmente los derechos previstos en su parte dogmática" y que resultan de indispensable consideración para el intérprete (Kielmanovich, Jorge L., "Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita", LL 2019-D, 1063).

La construcción y permanente revisión de los instrumentos encaminados a cumplir la manda de una tutela efectiva (conf. art. 42 CN) imponen ensanchar la mirada a ese plano convencional. La innegable yuxtaposición entre derechos del consumidor y derechos humanos, habilita la extrapolación de los principios y garantías procesales provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a las personas consumidoras (ver, por todos, Sahián, José H., "El fundamental acceso gratuito a la justicia", LL 2024-E, 466; ver asimismo, Tambussi, Carlos E., "Consumidores, derechos humanos, convencionalidad y no regresividad", en *Revista de Derecho de Daños 2016-1, Consumidores,* p. 417 y sgtes.). Acudir a los estándares presentes en convenciones e instrumentos internacionales permitirá verificar y decidir las controversias en un todo de acuerdo a la manda constitucional de ofrecer "procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos" (art. 42 CN).

En la constante revisión de las medidas adoptadas para dar satisfacción a la manda de acceso a justicia y a una tutela judicial efectiva, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promueve estudios a fin de evaluar los avances en el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Estados. Así, se recuerda que "El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es solo negativa —de no impedir el acceso a esos recursos—, sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia" (Estudio encomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Comisionado Víctor Abramovich ٧ cuyo informe fuera aprobado el 7/9/2007. https://cidh.oas.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accesodescindice.sp.htm;https:// www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6028.pdf).

Sin perjuicio de la consagración de esta específica tutela procesal en la Ley nacional de Defensa del Consumidor, en la Provincia de Tucumán, el legislador local -en ejercicio de sus facultades, conf. art. 121 CN-dispuso la regulación de los procesos de consumo en particular, con el objetivo de facilitar el acceso a justicia y robustecer los mecanismos de tutela de los

consumidores que reclamen ante los tribunales, la protección de sus derechos amenazados y efectivamente conculcados. El debate parlamentario desarrollado en la sesión del 3/5/2022 -donde se aprobara el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la Provincia de Tucumán (Ley N° 9531)- permite constatar que la regulación particular del beneficio de justicia gratuita, en estos procesos especiales, fue objeto de una especial valoración, como mecanismo de tutela diferenciada (https://legislaturadetucuman.gob.ar/pdfs/sesiones/versiontaq/2022-05-03.pdf).

El Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán vigente y aplicable al caso de autos, en el Capítulo 3 sobre "Procesos de consumo", dentro del Título VI dedicado a los "Procesos de conocimiento especiales", del Libro Segundo sobre "Proceso de Conocimiento", regula el beneficio de justicia gratuita. El art. 481 del digesto procesal local ratifica el ámbito de aplicación del beneficio (para los procesos de consumo), la calidad requerida para ser beneficiario del mismo (consumidor individual o colectivo), la automaticidad de su concesión ("sin necesidad de trámite o declaración alguna") y el alcance amplio de su contenido ("todas las actuaciones judiciales se encuentran exentas del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, depósitos y de todo otro gasto que pueda irrogar el juicio").

Ahora bien, en el art. 487, luego de dejar establecido que "El consumidor o usuario vencido no podrá ser condenado en costas", prevé un único supuesto de excepción a la regla antes mencionada, al disponer que "el Tribunal podrá aplicárselas, total o parcialmente, cuando por circunstancias especiales haya quedado manifiestamente demostrado que litigó sin razón probable".

El legislador local, al regular la figura, decidió no incluir el incidente de solvencia como resorte a articular por el proveedor demandado a fin de privar al consumidor del beneficio de justicia gratuita; criterio que guarda relación con los proyectos del Código de Defensa del Consumidor con estado parlamentario en el Congreso Nacional desde el año 2018 hasta la actualidad (Proyectos de Código de Defensa del Consumidor: a) en la Cámara de Diputados: Expte. N° 5156-D-2020; Expte N° 841-D-2022 y Expte. N° 128-D-2024 (Frente de Todos/Unión por la Patria); Expte. N° 3143-D-2020 y Expte N° 3607-D-2022 (Juntos por el Cambio); b) en la Cámara de Senadores: Expte. N° S-2576-19; Expte. N° S-1745-21 y Expte. N° S-337/23 (Juntos por el Cambio).

El criterio adoptado en las sucesivas iniciativas legislativas precedentemente citadas, es explicado en los "Fundamentos" que acompañan los diferentes proyectos, que tomaron como base el mismo Anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor elaborado por la Comisión designada al efecto. Allí se señala que la norma propuesta para regular el beneficio de justicia gratuita "importa una toma de posición definida en orden a la naturaleza de este beneficio" aclarando que "no se trata de un beneficio de litigar sin gastos, o carta de pobreza, o figura similar, motivada en la carencia de medios económicos para acceder a la Justicia. La finalidad del beneficio aquí reconocido

radica en garantizar al consumidor el acceso a la justicia por su condición de tal, sin otro requisito". Se destacó que "es éste uno de los instrumentos que permite dotar de mayor efectividad a los derechos del consumidor, y no se instituye de manera directa en beneficio del actor en particular, sino de todo el colectivo de consumidores. La posibilidad de evitar cortapisas que limiten el acceso a la justicia, constituye en sí misma un instrumento más de regulación del mercado, tendiente a evitar que se produzcan violaciones a los derechos de los consumidores". Se señaló, no obstante, que "ello no importa conceder un permiso para litigar sin consecuencia patrimonial alguna, y de allí que se disponga en la parte final de la norma que el beneficio se pierde en caso de temeridad, malicia o petición inexcusable" (Suplemento Especial. Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, La Ley, 17/12/2017).

Efectivamente, las iniciativas de reforma de la Ley N° 24.240, plasmadas en el Proyecto de Código de Defensa del Consumidor -en sus diferentes versiones, pero sobre la base del mismo Anteproyecto- no contemplan la posibilidad de promover el incidente de solvencia para privar al consumidor del beneficio de justicia gratuita legalmente reconocido y de concesión automática, por su calidad de tal. Se trata de una decisión receptiva de las objeciones planteadas por la doctrina, que consideraron un desacierto la previsión de un mecanismo de cese del beneficio, apartado de la naturaleza y fundamento de la tutela procesal analizada (cfr. Piedecasas, Miguel A., "La Ley 26.361. Reseña general", *Revista de Derecho Privado y Comunitario 2009-1, Consumidores*, p. 125; Junyent Bas, Francisco - Garzino, María Constanza - Rodríguez Junyent, Santiago, *Cuestiones Claves de Derecho del Consumidor a la luz del Código Civil y Comercial*, p. 258).

"Con independencia del éxito parlamentario del Proyecto de Código de Defensa del Consumidor, no puede negarse que ya se ha constituido como un eje de referencia para los debates doctrinarios de nuestra disciplina e incluso para la construcción de las respuestas jurídicas de nuestros tribunales" (Hernández, Carlos A. - Japaze, María Belén - Ossola, Federico A. - Sozzo, Gonzalo - Stiglitz, Gabriel A., "Antecedentes y estado actual del Proyecto de Código de Defensa del Consumidor", LL 2020-A, 939). A lo apuntado, cabe agregar que las jurisdicciones locales han avanzado en una línea revisora, encaminada a ofrecer regulaciones superadoras de las tutelas procesales previstas en la Ley nacional de Defensa del Consumidor, en general; y, en particular, al tratar el beneficio de gratuidad en los procesos de consumo (por ejemplo, el Código Procesal de la Justicia de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, etc.).

La coexistencia de disposiciones procesales en la ley de fondo y las previstas por el legislador en las jurisdicciones locales es un dato de la realidad. La Corte nacional ha ratificado, en reiterados pronunciamientos, la constitucionalidad de las normas procesales previstas en las leyes dictadas por el Congreso Nacional, en tanto resulten indispensables para

asegurar la efectividad de los derechos reconocidos por éstas (CSJN, Fallos 107:303; 138:157; 139:576 y 259; 141:254; 143:294; 162:376; entre otros).

Ahora bien, y conviene reiterarlo, "a través de las normas de fondo se estipula un piso mínimo de tutela a partir del cual cada jurisdicción determinará una protección más o menos concreta y específica" (Quaglia, Marcelo C., "El rol del juez en el proceso de consumo", en Peyrano, Jorge W. (Dir.), *La vulnerabilidad en los Procesos Judiciales*, 493). El territorio de tutelas procesales diferenciadas y sus límites exhibe una "ínsita movilidad" que propicia el perfeccionamiento en su diseño e implementación (cfr. Berizonce, Roberto O., "Fundamentos y confines de las tutelas procesales diferenciadas", en Revista de Derecho Procesal 2008-2, p. 44).

En esa línea es que la doctrina, al analizar en concreto la regulación de esta tutela especial, ha sostenido que las jurisdicciones locales de ningún modo pueden cercenar o restringir el beneficio de gratuidad establecido por el legislador nacional en el estatuto del consumidor (cfr. Depetris, Carlos E., "El beneficio de justicia gratuita y las costas en acciones individuales de consumo, Alternativas de decisión y consecuencias prácticas", RCCyC 2024 (agosto), 229). Resulta igualmente indudable que la legislación procesal local puede robustecerlo en pos de la mayor eficacia del mismo. Ha sido ésa la exhortación de quienes sostienen -desde hace tiempo- que "sería auspicioso que las provincias dicten leyes en tal sentido" (Vázquez Ferreyra, Roberto A- Avalle, Damián, "El alcance del beneficio de justicia gratuita en la Ley de Defensa del Consumidor", LL 2009-C, 401; Junyent Bas, Francisco- Garzino, María Constanza-Rodríguez Junyent, Santiago, Cuestiones Claves de Derecho del Consumidor a la luz del Código Civil y Comercial, p. 262-263). Y en esa línea argumental se ha entendido que "la racionalidad del microsistema de defensa de los consumidores justifica el avance hacia la desestimación del incidente de solvencia en el marco del beneficio de justicia gratuita" (Sahián, José H., "El fundamental acceso gratuito a la justicia", LL 2024-E, 466).

El código procesal local se enrola en la idea de que el beneficio de justicia gratuita se concede a quien asume la calidad de consumidor y en razón de su situación de vulnerabilidad estructural, y no en vista a la coyuntural situación patrimonial de quien acude al tribunal, en el caso particular. Se insiste en que esta tutela procesal especial hace "un claro foco en la naturaleza de los derechos defendidos y no en la solvencia del actor" concreto (Junyent Bas, Francisco-Garzino, María Constanza-Rodríguez Junyent, Santiago, Cuestiones Claves de Derecho del Consumidor a la luz del Código Civil y Comercial, p. 258; asimismo, Junyent Bas, Francisco- Garzino, María Constanza, "Proceso judicial de consumo" en Álvarez Larrondo, Federico (Dir.)-Rodríguez, Gonzalo (Coord.), Manual de Derecho del Consumo, p. 988 y 989).

El legislador local decidió incluir, en el novel digesto procesal civil y comercial, la regulación sobre los procesos de consumo, "con el máximo estándar de compromiso con el imperativo constitucional de concebir un procedimiento eficaz para garantizar los derechos de los

consumidores y con el derecho humano a una tutela judicial efectiva" (Sahián, José H., "La necesidad de regulación de los procesos individuales de consumo. Comentario al Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán", SJA, 07/10/2020, 59).

En cumplimiento del débito legislativo impuesto por el art. 42, 3er. Párrafo, de la Constitución Nacional y de las directivas que emergen de los arts. 24 y 40, inc. 9, de la Constitución de la Provincia de Tucumán, el código de rito avanzó en el perfeccionamiento de este mecanismo de tutela procesal diferenciada, ampliando la protección del beneficiario de la misma.

Este fortalecimiento de la tutela especial en favor del colectivo de consumidores guarda coherencia con la concreción de otras iniciativas legislativas provinciales como la Ley N° 9602 (BO 10/11/2022) denominada "Ley para la Adecuación al Derecho de las Vulnerabilidades" (cuyo objeto es, establecer "como política prioritaria para el Estado Provincial la implementación de la perspectiva de vulnerabilidad de manera transversal como una forma de llegar a la igualdad prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional, y de hacer efectivos los derechos humanos consagrados en ella y en los tratados internacionales, brindando herramientas de detección y reacción frente a las lesiones de derechos. Para ser aplicado a las políticas públicas, actos administrativos, protocolos, a las normas provinciales y municipales, a los procesos y actos del Poder Judicial de la Provincia y Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa", (art. 1).

En la regulación procesal local, el "derecho de acceso a justicia" y a "procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos" se robustece en consonancia con el principio según el cual "El Estado debe adoptar medidas apropiadas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de los consumidores que se derivan de las normas internacionales y nacionales, sin retroceder en los estándares de tutela alcanzados en los niveles normativos de protección ni en la implementación de la política de protección del consumidor..." (art. 2, inc. e, del Anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor de 2024; art. 5, inc., 1 de las diferentes versiones del Proyecto de Código de Defensa del Consumidor con estado parlamentario en el Congreso Nacional desde el año 2019).

El legislador local reguló el beneficio de justicia gratuita asumiendo el compromiso de incrementar progresivamente el nivel de goce de los derechos ya reconocidos (art. 53 LDC) y, consecuentemente, observar la manda de irreversibilidad o "no regresión" normativa (cfr. Sahián, José H., "Principios de progresividad y no regresión en el Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor", *Sup. Especial. Comentarios al Anteproyecto de LDC*, 111).

Como ya se señalara, los mecanismos de tutela diferenciada, cualquiera sea la técnica a la que se acuda, han de ser legislados e interpretados "según corresponda, conforme la finalidad perseguida por el art. 42 de la CN, a lo que debemos añadir los principio pro homine, de progresividad y no regresión provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, por

su especificidad, el principio pro consumidor que, a más de su anclaje constitucional, está estatuido en el art. 3 LDC y en el art. 1094 del CCyC" (Sahián, José H., "La necesidad de regulación de los procesos individuales de consumo. Comentario al Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán", SJA, 07/10/20202, 59).

La doctrina insiste en modo enfático en la necesidad de analizar y decidir las controversias vinculadas al beneficio de gratuidad receptado por la ley de fondo -y eventualmente regulado en las normas de procedimiento locales- acudiendo al plano constitucional y convencional, conscientes de que "la constitucionalización del Derecho Privado y el consecuente e imprescindible diálogo de fuentes proponen un nuevo modelo en la interpretación de las reglas de protección" (Barreiro, Rafael F., "La gratuidad de las acciones individuales de consumo. Vigencia efectiva del principio protectorio con perspectiva constitucional y convencional en una contundente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán", JA 2023-I, 526; ver asimismo, Kalafatich, Caren- Barocelli, Sebastián, "Gratuidad en los procesos de consumo", LL 2017-D, 1; Lovece, Graciela I., "El consumidor, el beneficio de la justicia gratuita y las decisiones judiciales", LL 2017-D, 154; Krieger, Walter, "El beneficio de gratuidad en la Ley de Defensa del Consumidor y el proceso eficaz", LL 2014-D, 407).

Es indudable que el principio in dubio pro homine, emparentado al principio pro consumidor, impone una interpretación que afinque en "la norma más amplia cuando se trate de protección y a la norma más estricta cuando se trate de restricciones a los derechos, de conformidad a los expresado en los arts. 29 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos" (Frustagli, Sandra A. - Hernández, Carlos A., "La protección al consumidor desde la perspectiva de los derechos humanos y de los derechos fundamentales", JA 2017-III, 1341). Frustagli y Hernández destacan que "En relación con la tutela judicial efectiva, este principio in dubio pro homine cobra virtualidad sustancial en ciertas situaciones. Así, cabe citar como ejemplo la situación de aquellas provincias donde aún no se han establecido procedimientos judiciales que otorguen una mayor protección para los consumidores y usuarios, para sustentar la constitucionalidad de las normas procesales de la ley 24.240 que resulten más beneficiosas, pues han de primar por sobre una disposición de la parte orgánica de la Constitución Nacional. También resulta de utilidad en los conflictos interpretativos que plantea en las distintas jurisdicciones provinciales el beneficio de justicia gratuita reconocido en la ley 24.240".

El pronunciamiento del Tribunal de Alzada incurre en un análisis sesgado de la cuestión sometida a su conocimiento, al omitir la consideración de la regulación procesal local del beneficio de justicia gratuita que sólo prevé un supuesto de cesación de esa tutela especial a efectos de la imposición de las costas (art. 487 CPCCT), excluyendo implícitamente la posibilidad de que el proveedor promueva el incidente de solvencia a tal fin.

Sin perjuicio de la interpretación en clave constitucional y convencional del art. 53 de la LDC que consagra el beneficio de

gratuidad, y de los cuestionamientos al incidente de solvencia allí previsto, resulta indudable que el legislador local redefinió los contornos de esta tutela procesal particular y de conformidad al principio de progresividad, elevó el estándar de protección de los beneficiarios de la misma.

De conformidad a la regulación contenida en las disposiciones procesales locales, el proveedor no se encuentra habilitado a promover el incidente de solvencia a fin de obtener la cesación del beneficio de gratuidad. Y de allí que corresponda receptarse la impugnación casatoria y dejar sin efecto la sentencia recurrida, con fundamento en el apartamiento del derecho aplicable y de su recta interpretación que -en el sublite- asume además, caracteres de gravedad institucional.

Al confrontar e interpretar las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor (art. 53) con las contenidas en nuestro digesto procesal (arts. 481 y 487), se concluye con acierto que "La norma local desplaza 'la excepción' de la legislación sustantiva, cualquiera sea el método que empleemos. Y ello no es sólo predicable de la legislación adjetiva transcripta, sino de cualquier reglamentación que haya regulado el beneficio de gratuidad sin la mención expresa del incidente de solvencia. Veamos. Si nos atenemos a modelos tradicionales, la norma adjetiva local debe tener preferencia respecto de la nacional, ya que aquella constituye una regla inserta en un sistema de presupuestos mínimos, pensados ante la ausencia de regulaciones procesales provinciales. Segundo, si utilizamos una técnica más sofisticada como el diálogo de fuentes, entonces, la excepción -a la gratuidad- de la ley procesal provincial (no tener razón probable para litigar) deviene más deferente, que la nacional (solvencia económica del consumidor), con el raciocinio que guía al microsistema, el principio protectorio y la presunción iuris et de iure de vulnerabilidad estructural que caracteriza a aquel. Tercero, desde luego, que la acumulación de excepciones a la gratuidad, de la norma nacional y local, empeoraría la situación del consumidor por lo que no puede ser contemplada como posibilidad, por el principio de interpretación más favorable al consumidor" (Sahián, José H.- Páez Pacheco, Emmanuel, Gratuidad. Beneficio de litigar sin gastos. Acceso gratuito a justicia de consumidores, p. 252).

Cabe insistir en la relevancia de los principios que definen la autonomía del sistema protectorio del consumidor, dirimentes al momento de interpretar el derecho aplicable. Destaca Lorenzetti que "la fuente constitucional confiere al Derecho de los Consumidores el carácter iusfundamental, lo que significa que el sistema de solución de conflictos normativos no está guiado por las reglas de resolución de antinomias legales tradicionales" (Lorenzetti, Ricardo L., *Consumidores*, p. 49-52).

El principio de interpretación pro consumidor establecido por el art. 3, 2do párrafo, LDC y art. 1094 del CCyC, constituye una derivación del principio de protección (art. 42 CN y art. 1 LDC) "y muestra cómo este principio constitucional y legal se transforma a la hora de la existencia de conflictos normativos en un postulado de maximización de la tutela". Esta regla de

interpretación "manda al operador del campo jurídico a realizar la actividad hermenéutica en favor del consumidor cuando existe una contradicción entre dos de sus normas" (Sozzo, Gonzalo, "El diálogo de fuentes en el Derecho del Consumidor argentino", en *Revista de Derecho de Daños 2016-1, Consumidores,* p. 252).

V.3.- La decisión adoptada por la Cámara desatiende las directivas de interpretación precedentemente reseñadas y de allí que la conclusión a la que arriba luzca apartada del derecho aplicable. A la vez, por infundada, la sentencia deviene arbitraria.

La cesación del beneficio de gratuidad motivada en la procedencia del incidente de solvencia previsto en el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, se aparta de los dispositivos legales estrictamente aplicables y de las directivas de interpretación constitucionales y convencionales implicadas.

El Tribunal de Alzada reconoce que las normas de carácter procesal incluidas en leyes sustantivas por el Congreso Nacional constituyen un mínimo necesario para el resguardo de los derechos implicados, así como la potestad de las jurisdicciones provinciales para robustecer y ampliar el nivel de tutela. Pero a renglón seguido, desestima las alegaciones del actor fundadas en la existencia de normas procesales locales que regulan el beneficio de justicia gratuita en los procesos de consumo, de modo más favorable al consumidor, excluyendo al incidente de solvencia como mecanismo disponible para peticionar la cesación de esa tutela procesal diferenciada. Todavía más: la Cámara reprocha al actor proponer una postulación que califica como irracional y apartada del ejercicio regular del derecho invocado.

Parece necesario insistir en que "existe una concurrencia de facultades mediante la cual, a través del Congreso Nacional, se sancionan las leyes de protección mínima que luego las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden complementar ampliando dicha tutela", y que "las normas complementarias dictadas por las provincias y la Ciudad deben, en su caso, propender a la ampliación de los derechos de los consumidores" (Mendieta, Ezequiel N., "Facultades concurrentes entre Nación y Provincia de Buenos Aires para la protección del consumidor", LLBA 2021 (febrero), 1).

La doctrina es enfática al señalar que "las Provincias, en sus códigos procesales podrán volcar iguales o similares normas a las procesales introducidas en los códigos y leyes de derecho común y, por supuesto, ampliarlas" en tanto "no están condicionadas -a diferencia de la Nación-por lo 'necesario y suficiente', por ser las 'dueñas' de la jurisdicción" (Santiago, Gerardo A., "Las provincias, la Constitución Nacional, la Nación y las normas procesales. Los poderes delegados y las normas procesales. Facultades de la Nación y/o de las Provincias. Poder concurrente", *Sup. Doctrina Judicial Procesal* 2013 (febrero), 41).

La atenta lectura de los dispositivos que integran el capítulo de los procesos de consumo en el código procesal civil y comercial de

Tucumán, revela incuestionablemente que el legislador provincial decidió asumir el ejercicio de las facultades no delegadas, incluir en el digesto de rito un capítulo especial dedicado a los procesos de consumo y ofrecer normas que amplían el nivel de protección mínimo establecido en la ley sustancial nacional; conclusión que resulta evidente al analizar concretamente —y entre otras normas- la regulación del beneficio de justicia gratuita del art. 481. En efecto, la norma citada define la fisonomía particular del beneficio de gratuidad, explicitando el alcance amplio de esta tutela procesal diferenciada (al disponer que "todas las actuaciones judiciales se encuentran exentas del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, depósitos y de todo otro gasto que pueda irrogar el juicio"), dejando asimismo establecido en el art. 487, que "el consumidor o usuario vencido no podrá ser condenado en costas".

La voluntad de una protección reforzada se hace evidente en este último precepto, cuando al prever excepciones a la regla de la gratuidad de las actuaciones, el legislador local decide establecer una única causal de cesación del beneficio y no considerar la promoción del incidente de solvencia a tal fin. En efecto, luego de dejar establecido que el consumidor vencido no puede ser condenado en costas, dispone que "por excepción, el Tribunal podrá aplicárselas, total o parcialmente, cuando por circunstancias especiales haya quedado manifiestamente demostrado que litigó sin razón probable"; criterio que va en línea con los proyectos de reforma de la Ley N° 24.240 que cuentan con actual trámite parlamentario en el Congreso Nacional y con la opinión de la doctrina mayoritaria, precedentemente reseñada.

Frente a la regulación pormenorizada del beneficio de justicia gratuito contenida en el código procesal de Tucumán, interpretar que la no previsión del incidente de solvencia es una omisión del legislador y que esa laguna debe ser enmendada con las disposiciones de contenido mínimo de la ley nacional, luce más bien contrario a la letra y al espíritu de las normas implicadas, como así también a las inveteradas pautas hermenéuticas plasmadas en pronunciamientos reiterados de la Corte Nacional, según las cuales aquellos déficits (imprevisión y eventual omisión) no pueden ser presumidos por el intérprete.

La interpretación propuesta por el Tribunal de Alzada ignora, sin justificación, la indudable decisión del legislador local, de ampliar el piso de protección previsto por la ley sustancial nacional, con disposiciones que avanzan en una tutela diferenciada, de innegable progresividad. El pronunciamiento impugnado importa el sostenimiento de un criterio contrario al principio no regresión sobre el que, entre otros, se estructura el sistema protectorio del consumidor (Hernández, Carlos A.- Japaze, Belén- Ossola, Federico A.- Sozzo, Gonzalo- Stiglitz, Gabriel A., "Hacia el Código de Defensa del Consumidor", LL 15/03/2021, 1).

La existencia de una laguna en las normas procesales locales a la que la Cámara alude, sólo se explica a partir de un deficiente análisis e interpretación del derecho aplicable. Y siendo así, la

aplicación por analogía de la norma prevista en la ley de fondo, carece de la debida fundamentación.

A mayor abundamiento, aun cuando se negara que la supresión del incidente de solvencia fue una decisión del legislador provincial y se interpretara que existe una laguna en la normativa procesal local, "para atribuir al caso no regulado las mismas consecuencias jurídicas atribuidas al caso regulado, es necesario que entre los dos exista no una semejanza cualquiera, sino una semejanza *relevante*... es necesario que los dos casos, el regulado y el no regulado, tengan en común la *ratio legis*, para que el razonamiento por analogía sea admisible. Es lo que se ha plasmado en la tradicional fórmula: *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio* ('donde hay igual razón, debe haber igual disposición')" (Bobbio, Norberto, *Teoría general del derecho*, ps. 247 y 248)". La innegable voluntad del legislador local de ampliar el nivel de protección mínimo establecido en la ley de fondo y de robustecer la tutela procesal aquí analizada, impide sostener la existencia de una razón común entre los dispositivos examinados.

El legislador provincial realizó ajustes a fin de asegurar la implementación eficaz del beneficio de gratuidad garantizando al colectivo de consumidores (con prescindencia de las circunstancias particulares del actor concreto), no sólo el acceso a justicia sino también el tránsito y la permanencia en el proceso iniciado para peticionar la protección de los derechos. Esa voluntad innegable de ofrecer mejores condiciones para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos, marca una clara diferencia entre la regulación nacional y la local; y de allí que el debate de autos no pueda resolverse aplicando una norma de contenido mínimo que el legislador provincial dispuso ampliar.

VI.- Corresponde, por lo expuesto, hacer lugar al recurso de casación interpuesto, de conformidad a las siguientes doctrinas legales:

a)- "La regulación del beneficio de justicia gratuita previsto en los arts. 481 y 487 del Código Procesal Civil y Comercial local excluye la posibilidad de promover el denominado incidente de solvencia a efectos de hacer cesar aquel beneficio y justificar la imposición de las costas al consumidor. A tenor de las disposiciones locales, el Tribunal podrá por excepción imponérselas, total o parcialmente, cuando por circunstancias especiales haya quedado manifiestamente demostrado que litigó sin razón probable".

b)- "De conformidad a la regulación del beneficio de justicia gratuita contenida en la legislación procesal local, no corresponde dar trámite al incidente de solvencia promovido por el proveedor demandado".

c)- "Se aparta de la recta interpretación del derecho aplicable, comprometiendo la eficacia de una tutela procesal diferenciada establecida en favor del consumidor, la sentencia que da curso al incidente de solvencia promovido por el proveedor, con el objeto de hacer

cesar el beneficio de justicia gratuita".

Corresponde, en consecuencia, dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado, dictando como sustitutivo, el siguiente:

"I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia de fecha 21/5/2024, que se deja íntegramente sin efecto. En consecuencia, rechazar el incidente de oposición al beneficio de justicia gratuita reconocido al actor de autos Domingo Fuad Asfoura, de conformidad al art. 53 LDC;

II.-Costas de ambas instancias: a) sin imposición de costas al actor (art. 487 del CPCC); b) costas del demandado, a su cargo (art. 61 inc. 1 del CPCC).

III.- Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".

VII.-Atento a las razones que justifican la procedencia del recurso, a que se trata del primer pronunciamiento de esta Corte sobre la cuestión propuesta al debate y entendiendo que la demandada pudo considerarse con razón probable para litigar, las costas de esta instancia extraordinaria se establecen del siguiente modo: a) sin imposición de costas al actor (art. 487 del CPCC); b) costas del demandado, a su cargo (art. 61, inc. 1, del CPCC).

El señor Vocal doctor Antonio D. Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, doctor Daniel Leiva, vota en idéntico sentido.

El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Adhiero a la prolija y detallada reseña de antecedentes efectuada por el señor Vocal preopinante. No obstante, disiento respecto del juicio de admisibilidad efectuado, en tanto considero que el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada con fecha 4/12/2024 por la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Capital es inadmisible.

En esa convicción, estimo que el recurso en examen ha sido objeto de un adecuado tratamiento por el señor Ministro Fiscal en su dictamen de fecha 3/6/2025, cuyos fundamentos comparto y a los cuales me remito para explicar la falta de definitividad de la sentencia y la ausencia de gravedad institucional (arts. 805 incs. 1° y 2° del CPCC).

En orden al definitividad del pronunciamiento impugnado, resulta relevante señalar que la cuestión traída en casación se origina con motivo del incidente de cese de justicia gratuita promovido por la parte demandada en los términos del art. 53 de la LDC n° 24.240, a los efectos de que, previa acreditación de que los actores son solventes y poseen recursos

económicos suficientes para afrontar los gastos del juicio, se declare la exclusión del beneficio de gratuidad que concede la mentada norma.

La sentencia impugnada en casación resolvió "no hacer lugar al recurso de apelación -interpuesto por la actora -en fecha 03/07/24-, en contra de la sentencia de fecha 21/05/24".

Esta última dispuso hacer lugar al pedido de cese de beneficio de gratuidad (concedido al actor consumidor Asfoura Domingo Fuad en los términos del articulo 53 *in fine* de la ley 24240), solicitado por la parte demandada en su presentación de fecha 22/11/2023.

Con claridad se advierte entonces que la resolución impugnada no reviste el carácter de definitiva en los términos del art. 805 inc. 1° CPCC, toda vez que no resuelve el fondo de la litis, sino que ha sido dictada en una cuestión incidental y lo decidido no pone fin al pleito ni hace imposible su continuación. Por el contrario, la decisión implica que el proceso principal debe continuar tramitándose, por lo que la resolución dictada por la Cámara carece de virtualidad conclusiva del pleito.

A ello se suma que tampoco luce configurado el supuesto de gravedad institucional que por excepción autorice la apertura de la instancia extraordinaria local (conf. art. 805 inc. 2° del CPCC). Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o puedan resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos. (CSJT, sentencia Nº 1033 del 03/11/2008, "Márquez de Toledo Beatriz vs. Ecco S.A. y otro s/ Daños y perjuicios"; Nº 1049 del 09/11/2007, "Ortiz Ramón Calixto vs. Bazar Las Oportunidades S.R.L. s/ Cobro de pesos. Incidente extensión civil prom. por el actor"; entre muchas otras; Nº 1020 del 30/10/2006, "Díaz, Carlos Gustavo vs. Refinería de Maíz S.A.I.C.F. s/ Despido"; Nº 863 del 25/9/2006, "Gómez, Ana María vs. Ivars, Juan Bautista s/ Cobro ejecutivo de pesos"; Nº 172 del 24/3/2000, "Góngora de Díaz, Juana Angélica vs. Sorio, Héctor Hugo y otro s/ Daños y perjuicios", Nº 1073 del 20/12/2001, "Magi, Francisco José vs. Zuccardi, Marcelo s/ Acción de amparo. Queja por recurso de inconstitucionalidad"; entre otras).

Es así que lo decidido por el Tribunal de grado no trasciende el interés individual de las partes que intervienen en el proceso, sino que se circunscribe a una controversia entre particulares, en virtud de la cual se dirime si corresponde o no aplicarles a los actores el cese del beneficio de gratuidad que les otorga el art. 53 de la LDC.

Por lo demás, la mera invocación de que se habrían lesionado las garantías constitucionales o la infracción normativa que se denuncia tampoco habilitan a admitir la configuración del excepcional supuesto de gravedad institucional (CSJT, sentencias Nº 234 del 14/4/2010, "Gregorie Mabel del Valle vs. Acosta Silvia María s/ Cobro de pesos -Cuaderno de prueba del actor Nº 1-"; Nº 188 del 05/4/2010, "Caram Luis Daniel y otro vs. Salim Ricardo Antonio

s/ Acción declarativa de certeza y daños y perjuicios"; Nº 47 del 22/02/2010, "Provincia de Tucumán vs. Carrapizo José Eduardo y otros s/ Ejecución hipotecaria"; entre otras). Es que, como reiteradamente tiene dicho esta Corte, la definitividad del pronunciamiento es un recaudo propio y autónomo del recurso extraordinario local que no se satisface ni se suple por la invocación de garantías constitucionales que se entiendan amenazadas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso (CSJT, sentencia Nº 9 del 16/2/2011, "Suárez Dora del Valle vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Incidente promovido por la parte actora sobre beneficio para litigar sin gastos"; Nº 6 del 14/02/2011, "Sánchez Humberto y otro vs. Municipalidad de la Banda del Río Salí s/ Diferencias salariales"; Nº 188 del 05/4/2010, "Caram Luis Daniel y otro vs. Salim Ricardo Antonio s/ Acción declarativa de certeza y daños y perjuicios"; Nº 937 del 10/10/2007, "Dicsa Construcciones S.R.L. vs. Bernardo García Hamilton S.A. s/ Ejecución hipotecaria. Incidente"; entre otras).

Consecuentemente, el incumplimiento del art. 805 (incs. 1° y 2°) del CPCC determina la inadmisibilidad de la vía casatoria intentada por el recurrente.

Atento al resultado arribado, las costas del recurso de casación deberán ser soportadas por la parte actora vencida (art. 61, primera parte, del CPCC), quien quedará eximida del pago de las mismas atento a lo dispuesto por el art. 53 LDC. Se aclara que tal exención quedará supeditada a la firmeza de la presente sentencia.

Por ello, se RESUELVE:I.- DECLARAR INADMISIBLE recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada con fecha 4/12/2024 por la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Capital. II.- Disponer que se protocolice el dictamen del señor Ministro Fiscal de fecha 3/6/2025 adjunto a la presente sentencia, conforme a lo considerado.III.- COSTAS, como se consideran.IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

Voto de la señora Vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos, digo:

Estando de acuerdo con el voto del señor Vocal doctor Daniel Leiva, voto en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, visto lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial Común, Civil en Familia y Sucesiones y Penal,

RESUELVE:

- I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia de fecha 4/12/2024 dictada por la Sala III de la Excma. Cámara Civil y Comercial, de conformidad a las doctrinas legales precedentemente expuestas. En consecuencia, dejar sin efecto pronunciamiento impugnado, dictando como sustitutivo, el siguiente: "I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia de fecha 21/5/2024, que se deja íntegramente sin efecto. En consecuencia, rechazar el incidente de oposición al beneficio de justicia gratuita reconocido al actor de autos Domingo Fuad Asfoura, de conformidad al art. 53 LDC; II.- Costas de ambas instancias: a) sin imposición de costas al actor (art. 487 del CPCC); b) costas del demandado, a su cargo (art. 61, inc. 1, del CPCC); III.- Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".
 - II.- COSTAS, conforme se consideran.
- **III.- RESERVAR** pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

SUSCRIPTA Y REGISTRADA POR LA ACTUARIA/O FIRMANTE EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EN LA FECHA INDICADA EN LA CONSTANCIA DE LA REFERIDA FIRMA DIGITAL DE LA ACTUARIA/O.

NRO. SENT.: 1276 - FECHA SENT.: 22/09/2025

Firmado digitalmente por:

CN=MARTINEZ PARDO Tomas C=AR SERIALNUMBER=CUIL 20270171819 FECHA FIRMA=22/09/2025 CN=ESTOFAN Antonio Daniel C=AR SERIALNUMBER=CUIL 20080365749 FECHA FIRMA=19/09/2025 CN=POSSE Daniel Oscar C=AR SERIALNUMBER=CUIL 23126070039 FECHA FIRMA=22/09/2025 CN=RODRIGUEZ CAMPOS Eleonora C=AR SERIALNUMBER=CUIL 27264467875 FECHA FIRMA=22/09/2025 CN=LEIVA Daniel C=AR SERIALNUMBER=CUIL 20161768368 FECHA FIRMA=22/09/2025